

CATALUÑA

El PSC apuesta por suprimir los consejos comarcales

MERCÈ PÉREZ, Tarragona

El PSC se muestra dispuesto a reformular el mapa administrativo catalán y, en especial, a suprimir los consejos comarcales. El presidente del grupo parlamentario socialista, Joaquim Nadal, abrió ayer una nueva brecha en la discusión sobre el exceso de Administraciones, para pedir que en Cataluña se simplifique el mapa de coproraciones. "Quizá solo deban dejarse las veguerías y suprimir los consejos comarcales", expuso ayer en una entrevista para la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Nadal subrayó que la organización administrativa de Cataluña aún está abierta y que es el momento propicio para crear un debate. "Necesitamos una simplificación perceptible, la ciudadanía debe tener más claro a qué ventanilla ir para cada cosa", dijo el socialista, a la vez que animó a lograr un consenso entre todas las fuerzas políticas.

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, reafirmó la postura de Nadal y explicó que las labores que realizan los consejos comarcales, como las ayudas a los pequeños municipios, pueden ser asumidas por otros organismos. El socialista apuesta por transformarlos en mancomunidades o consejos de alcaldes. "Es muy difícil explicar a los ciudadanos que por encima de ellos tienen hasta seis Administraciones", dijo el alcalde de Tarragona en un almuerzo con los medios de comunicación. Sin embargo, Ballesteros fue más allá al exponer que el adelgazamiento de la Administración debe pasar por recortar "cargos de confianza, además de directivos". Ballesteros también advirtió de que algunas diputaciones tienen que "repensarse". "Sé que esta postura causa críticas, incluso dentro de mi partido", se lamentó el alcalde de Tarragona.

Modelo propio

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, cargó contra la propuesta del PSC y defendió la utilidad de la mayoría de consejos comarcales, a excepción de los del área metropolitana de Barcelona. "Tenemos un modelo propio, Nadal debería saberlo porque lo votó en el Parlament", esgrimió Ortega. La vicepresidenta acusó a Nadal de ir a "remolque" de las propuestas del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Además, trató de cerrar el debate recordando al socialista que Cataluña tiene un sistema de organización fundamentado en los consejos comarcales y en las veguerías, a pesar de que CiU paró la ley en el Parlament. "Los consejos comarcales hacen un trabajo muy necesario a la hora de mancomunar servicios entre municipios", zanjó Ortega.

La Generalitat ya recorta la RMI a quienes cobraban más de 640 euros

El nuevo límite se aplica sin tener en cuenta los hijos o personas dependientes

VIENE DE LA PÁGINA 1

Con estas reformas, el Gobierno catalán quiere frenar el aumento de solicitudes de RMI, exponencial desde el inicio de la crisis: si en 2008 había 12.570 beneficiarios, el pasado abril la cifra llegó a los 33.700. La memoria de los Presupuestos de 2011 subraya que es necesario hacer frente a este alud de peticiones "estableciendo medidas que permitan contener el fuerte ritmo de crecimiento de las prestaciones y adaptar los recursos a la realidad actual". La Generalitat destinará este año 130 millones a la RMI, 40 millones más que el año pasado, una cantidad con la que el Departamento de Empresa tiene previsto "garantizar" la RMI a 35.000 familias.

Los recortes en la renta mínima incluidos en la ley de acompañamiento ya han llevado a la Generalitat a empezar a quitar la ayuda a quienes llevaban más de 60 meses cobrándola, según han confirmado algunos servicios sociales municipales.

Los trabajadores sociales consultados comparten con el Gobierno catalán la necesidad de controlar los casos en los que la renta mínima se había convertido en una "ayuda vitalicia" que desincentivaba al propio beneficiario a cambiar su situación. Pero también alertan del futuro que espera, si no se adoptan otras medidas, a aquellos con más problemas de inserción, como toxicómanos y enfermos mentales, "con pronóstico laboral cero y sin ayudas alternativas a las que acudir". "Debemos admitir como sociedad que siempre habrá un pequeño grupo que no es



Francesc Xavier Mena, consejero de Empresa. / JOAN SÁNCHEZ

insertable socialmente y plantearnos qué hacer con ellos", añaden estas fuentes. Desde el Departamento de Bienestar Social apuntan, en cambio, que a este colectivo se le ayudará a buscar otro tipo de prestaciones a las que puedan acceder.

La nueva normativa pone límites también al compatibilizar la RMI con otras prestaciones, como pensiones por jubilación o invalidez. La suma de todas las ayudas no podrá superar el salario mínimo interprofesional, 641 euros mensuales.

El cambio lo empezarán a notar en la próxima transferencia

bancaria que recibirán. Así consta en expedientes a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Por ejemplo, en el de una familia monoparental, formada por dos hijos menores y un tercero con una discapacidad, la unidad familiar percibía hasta ahora 840 euros mensuales. En septiembre cobrarán 200 euros menos.

Pero el decreto que prepara la Generalitat para desplegar con más detalle la ley prevé endurecer todavía más las restricciones. Eso afectaría a los parados que se queden sin la prestación y que "no acrediten ninguna dificultad social añadida". Deberán esperar

seis meses para solicitar la RMI. Técnicos de servicios sociales alertan del peligro de la medida, porque no evita que más personas caigan en el pozo de la marginalidad social. "La renta, en lugar de ayudar a las personas a no caer en la marginalidad, solo se les dará cuando ya lo hayan hecho. Entonces es mucho más difícil reinsertarlas en lo laboral y lo social", explica un gestor de la ayuda. El decreto también recoge que los beneficiarios solo podrán salir de Cataluña un máximo de un mes y siempre comunicándolo previamente. Además, el decreto propone que el número de ayudas concedidas quede limitado a la disponibilidad presupuestaria.

Mientras, la Generalitat continúa estos días realizando entrevistas a los beneficiarios de la RMI. Para llevar a cabo la revisión de 20.000 expedientes en agosto y septiembre (con un cuestionario de 11 preguntas con el que detectar posibles casos fraudulentos) cuenta con unos 40 administrativos que ha contratado a través de la empresa de trabajo temporal Randstad. La ETT, según un portavoz, se ha limitado a proporcionar "el personal administrativo requerido" por el Gobierno catalán sin participar en la revisión del sistema de la renta mínima. Hace unos meses, Randstad sí llevó a cabo otro proyecto en al menos tres municipios del área de Barcelona relacionado con esta prestación. "Pero entonces no se trataba de detectar fraude, sino de mejorar la empleabilidad de los beneficiarios", señaló un portavoz, informa Cristina Delgado.

Pobreza política ante la pobreza humana

ANÁLISIS

Àngels Guiteras Mestres

Solivianta el espíritu de una servidora atendiendo a sus lecturas estivales el que se ponga en solfa, a un mismo nivel y en los mismos medios, el hundimiento generalizado de las Bolsas, como consecuencia, entre otras, de la especulación financiera y la investigación sobre un supuesto fraude en alguna de las ayudas sociales concedidas en la prestación conocida como RMI, destinadas a personas en situación de pobreza o de máxima fragilidad social.

Durante todo el mes de agosto, día a día, ha ido apareciendo en los medios de comunicación la situación que se ha producido con los cambios efectuados por el Gobierno catalán en el pago de la RMI con la justificación, según dicen, de implementar medidas de control que acaben con el fraude. He podido leer la noticia con la repetición exacta de uno o dos párrafos en días seguidos. ¿De qué fraude estamos hablando?

Paradójicamente, parece ser que siguen la pista que alguna entidad bancaria ha señalado, de que son conocedores de que algunos de sus clientes perciben dicha ayuda, renta

mínima de inserción, y realizan transferencias al extranjero.

Las medidas adoptadas están ocasionando inestabilidad y sufrimiento en el colectivo más vulnerable e indefenso y demuestran poca sensibilidad hacia estas situaciones y poca confianza en los profesionales que desde los Ayuntamientos estudian, evalúan y hacen seguimiento de los beneficiarios de las ayudas. Se ha creado una situación de indefensión forzosa, algunos no saben cómo afrontarlo y no tienen voz: son los que tienen que sufrir la burocracia administrativa en su peor cara.

Estamos de acuerdo en potenciar medidas de control en general y en eliminar las situaciones de fraude, aunque lamento que no se dé prioridad a perseguir el fraude de aquellas personas que tienen relación directa con la recesión económica en la que estamos inmersos, y que se haga de manera inadecuada "criminalizando" a quienes no tienen las necesidades básicas cubiertas, como la vivienda y la alimentación.

Estar centrados en la RMI distrae la atención de otros fraudes, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, afecta a la dignidad de las personas más necesitadas y las hace sentir aún más vulnerables.

La gestión, precipitada, descontrolada y

no compartida, en el mes de agosto, de supuestas medidas de control de las prestaciones sociales básicas no ha tenido mayores consecuencias debido al importante tejido de entidades sociales que han reduplicado sus esfuerzos para, una vez más, estar al lado de las personas que más lo necesitan.

En esta época que estamos viviendo marcada por la incertidumbre, la vulnerabilidad y la segregación social, proteger la cohesión social es clave para prevenir y evitar situaciones que generen mayores desigualdades y explosiones de violencia, que están ya apareciendo en algunas sociedades, con el consecuente incremento de la inseguridad, y que provocan, también, grandes *deseconomías*. Es necesario ver la cohesión social en clave de crecimiento económico, creación de ocupación y mejora de la sociedad para afrontar de manera compartida los retos planteados. Hay que considerar la inversión social una exigencia para salir de la recesión económica, que en buena medida tiene sus raíces en la crisis social y de valores que estamos viviendo.

Hay cambios y medidas de control que, si se planifican adecuadamente, ni perjudican la credibilidad del buen hacer de un Gobierno ni hacen sufrir a los ciudadanos. Albergó aún la esperanza de que haya cierta autocrítica y rectificación para continuar también con la esperanza de que una sociedad mejor es posible.

Àngels Guiteras Mestres es presidenta de la Taula del Tercer Sector Social.